

**TRIBUNAL SEXTO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO JUEZ DOS, SAN SALVADOR;**  
a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de agosto del año dos mil veintitrés.

En la causa penal con número de referencia **16-23-6CCO-J2(5)**, seguida en contra del imputado ausente siguiente:

**1. Luis Alonso Portillo Turcios**, quien es de treinta y un años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, soltero, del domicilio de Santa Tecla, residente en: colonia San José, calle San José F-2, casa diez, Santa Tecla, departamento de La Libertad y de Residencial El Paraíso, Boulevard Sur, casa dos Q, Santa Tecla, departamento de La Libertad, originario de San Miguel, departamento de San Miguel,, hijo de Alba Lilian Turcios de Portillo y Luis Alonso Portillo Ramos, quien se identifica con documento único de identidad número cero cuatro seis cinco nueve cero seis cero - tres, nació el día treinta de julio del año mil novecientos noventa y dos.

A quien se le atribuye la comisión del delito de **Extorsión Agravada**, regulada en los Arts. 2 y 3 numerales 1, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, en perjuicio de la víctima **Erick Alfredo García Salguero**, en relación con el Art. 1 Inc. 2º, y 4 de la Ley Contra el Crimen Organizado.

#### **I. PARTES INTERVINIENTES**

En Audiencia de Imposición de Medidas Cautelares, relacionada a la presente causa penal, celebrada a las once horas con treinta minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, han intervenido como partes:

En calidad de **Agentes Auxiliares del señor Fiscal General de la República**, la licenciada **Carmen Marisol Ramírez Fuentes** y la licenciada **Karla Cristina Nathalie Preza Alvanez**.

En calidad de Defensor Público, el licenciado Julio Cesar Mojica Pérez, ejerciendo la defensa pública del procesado **Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez y Luis Alonso Portillo Turcios**.

#### **II.- COMPETENCIA**

Respecto a la figura procesal de la competencia, el Art. 15 de la Constitución, establece el principio de legalidad como parte de las garantías de todo procesado que garantiza que este sea juzgado conforme a las leyes preexistentes al hecho que se le impute y ante el Tribunal competente.

En ese sentido, resulta de vital importancia verificar si la autoridad judicial requerida se encuentra dotada de competencia para ejercer, en ese caso, la labor jurisdiccional que de manera abstracta le ha sido conferida por ley, en virtud de que el juez tiene encomendada la función de velar por el fiel cumplimiento de todos los derechos y garantías legalmente dispuestos a favor de quienes se someten al proceso penal.

Es así que la competencia se configura dentro del proceso penal como un presupuesto procesal indispensable para el correcto funcionamiento del sistema de enjuiciamiento de la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, es decir, no son las partes ni el juez los que deben definir de manera discrecional la sede judicial encargada de dirimir el conflicto penal, sino que la competencia para ello estará determinada por las disposiciones legales correspondientes; **así se**

verifica en resoluciones de incidentes 49- COMP-2010 y 25-COMP2011, de fechas 14 de diciembre de 2010 y 7 de diciembre de 2011, respectivamente.

Por tanto, la competencia es una materia cuya regulación se encuentra reservada exclusivamente a las disposiciones legales que sean aplicables al caso que se conoce y, como consecuencia, no puede ser interpretada de manera distinta a las reglas contenidas en aquéllas.

En ese sentido, este Juzgador destaca el cuidado que debe de tenerse al efectuar la interpretación de las reglas de la competencia, pues la misma no debe transgredir derechos y garantías de las partes, sino más bien coadyuvar a que el proceso penal instruido en contra del imputado se tramite en la vía jurisdiccional idónea, ello partiendo de los elementos que dentro del proceso consten para la delimitación. La Constitución de la República, en su artículo 172, regula que las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establecen las leyes secundarias integran el Órgano Judicial. Corresponde a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia penal, pero así mismo esta competencia penal por la exigencia de protección a bienes jurídicos instaurados en la constitución y esa obligación del estado de proteger al ser humano como origen y el fin de su existencia, artículo uno de la constitución, se ha creado la competencia funcional especializada para Crimen Organizado.

*En relación a lo anterior es aplicable lo establecido en la Resolución de la Sala de lo Penal de Ref. C 73- 03 /30-sep-2003, en la que señala que... "El Estado debe responder con mayor fuerza ante este tipo de criminalidad y por ende sacrificar algunos de los derechos fundamentales, siempre que se realice dentro del marco de aplicación del principio de proporcionalidad, entre la severidad de enfrentar esta delincuencia y la infracción de los derechos del ciudadano. También entiende este Tribunal que se han realizado cambios en los cuerpos normativos, reconociendo procedimientos que garanticen resolver eficientemente el problema de la delincuencia organizada, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y funcionalidad a través de la administración de justicia"...*

Así también de acuerdo al Art. 4 Ley Contra el Crimen Organizado- *"Corresponderá a la Fiscalía General de la República conforme a las diligencias de investigación, la determinación de la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por tribunales comunes o especializados. Sin embargo, cuando los elementos recogidos durante la fase de instrucción determinen que el proceso debió iniciarse en un juzgado especializado se le remitirá de inmediato a éste (...)"*.

En primer lugar, el concepto de crimen organizado del art. 1 inciso 2º de la Ley Especial Contra el Crimen Organizado consiste en: "aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio". De lo antes expuesto, se desprende que un caso puede considerarse como de crimen organizado cuando se cumplen los siguientes requisitos: 1) Que estemos frente a un grupo de 3 o más personas; 2) Que ellos estén estructurados; 3) Que se mantengan en cierto tiempo de forma concertada; y 4) Que el propósito sea el de cometer uno o más delitos graves y tener algún beneficio.

Doctrinariamente Luis Alonso Bruceet Anaya, en su obra *El Crimen Organizado* (Origen, Evolución, Situación y Configuración de la Delincuencia Organizada en México) Editorial Porrúa, 2001, pagina 60-61 define el crimen organizado como; *“Una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez, se caracteriza porque sus acciones no son impulsivas, sino más bien, resultados de provisiones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad y así amasar grandes oportunidades de dinero o de poder real, su pretensión no es tanto el poder político, el cual le interesa, más para propósito de protección; **en caso extremo el propósito de la delincuencia organizada no es competir con el gobierno sino utilizarlo**”*

Por otra parte, en la sentencia de inconstitucionalidad 6-2009, pronunciada por la Sala de lo Constitucional a las 16:00 horas del 19 de diciembre de 2012, en lo esencial y pertinente se establece: *“ (...) gramaticalmente cuando se utiliza el término “organización”, ella requiere dentro de una concepción adecuada y estricta del término, que los miembros de la misma actúen dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con posibilidad de sustitución de unos a otros mediante una red de reemplazos que aseguren la supervivencia del proyecto criminal con cierta independencia de las personas integrantes de la organización y que dificulten de manera extraordinaria la persecución de los delitos cometidos, aumentando al mismo tiempo el daño posible causado... En consonancia con lo anterior, es posible comprender la plenitud de tales requisitos, en orden a evitar dificultades probatorias, tomando como base un concepto de crimen organizado orientado a las consecuencias, en cuya esencia dos o más personas programen un proyecto, un plan o propósito para el desarrollo de la acción criminal, sin que sea precisa la existencia de una organización más o menos perfecta, bastando únicamente un principio de organización de carácter permanente. En este último sentido, ha de requerirse judicialmente una especial continuidad temporal o durabilidad que vaya más allá del simple u ocasional consorcio para el delito”.*

Lo anterior es compartido por el autor Ángel García Collantes, en su ensayo “Delimitación Conceptual de la Delincuencia Organizada” de fecha primero de julio del año dos mil catorce en el que expresa que *“la primera necesidad para definir la delincuencia organizada tiene como punto de partida diferenciar la organización criminal de una simple asociación para delinquir. Esto es, se está ante algo más que una simple agrupación de personas que se juntan para delinquir [...] de esta forma, de la delincuencia individual forman parte sin tener nada que ver con el crimen organizado, los actos delictivos puntuales de pluralidad de intervinientes que eventualmente comparten vínculos de fondo pero sin estructuras, ni distribución de papeles precisos, aunque ciertos individuos pueden desempeñar papeles dominantes.”*

Según la Corte Suprema de Justicia en el conflicto de competencia 1-COMP-2022 de las once horas y veinte minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós (...) *para determinar si un caso debe ser sometido a la jurisdicción penal especializada o a la ordinaria, el acto delictivo atribuido a un*

*imputado o a varios debe estar acreditado bajo un nivel de probabilidad positiva de que el ilícito fue cometido por un grupo o una organización delictiva, en la que se hayan establecido las responsabilidades asignadas a los mandos y sus miembros y las relaciones que existen entre sus integrantes de la cúpula decisoria y los ejecutores y que la razón de reunirse es con “el fin o propósito de delinquir”; aclarando que cuando se establece la expresión “con el fin”, el legislador no exige que se haya ejecutado la comisión de un delito, sino que esa sea su intención. (...)*

En vista que se ha realizado una investigación indiciaria por parte Ministerio Publico Fiscal en la cual se ha verificado la posible existencia del delito de **Extorsión Agravada**, previsto y sancionado en el Art. 2 y 3 numerales 1, 6,7, 9 y 10 de la Ley Especial Contra Delitos de Extorsión en perjuicio de víctima **Erick Alfredo García Salguero**, en ese sentido el crimen organizado no se limita necesariamente a actividades delictivas tradicionales como el tráfico de drogas u homicidio, sino que también puede abarcar actividades políticas y sociales que buscan socavar la estabilidad del país y podrían poner en riesgo su soberanía.

En la ley contra el crimen organizado es latente el hecho que su finalidad es evitar que se amenace o ponga en peligro la seguridad nacional y la integridad del estado. El objetivo de perseguir y sancionar el crimen organizado en casos de desestabilización es mantener la seguridad y el orden dentro del país, así como proteger los derechos y el bienestar de sus ciudadanos, es pertinente citar que el Art.2 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional que establece que Crimen Organizado es “*Un grupo delictivo organizado, de 3 o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directamente o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio material.*”

**Por lo que el suscrito Juez delimita los siguientes elementos:** (a) grupo compuesto de tres o más personas, lo cual en el presente caso se tiene como sujeto activo que presuntamente ha cometido hechos punitivos antes descritos, la investigación fiscal conlleva deductivamente a que los receptores de dicha investigación aparentemente es una estructura organizada, en donde el imputado tendría un rol de facilitador de información, es corroborado en el presente proceso indiciariamente con la documentación presentada, b) estructurado de manera indiciaria se cuenta que se entabla peticiones precisas en recolectar información de la víctima Erick Salguero; (c) que exista durante cierto tiempo el cual de acuerdo con las diligencias presentadas y a viva vos del Ministerio Publico Fiscal, los hechos han sido sucitados desde el año dos mil veintidós; y (d) actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos, lo cual al análisis de los hechos nos encontramos en una etapa embrionaria en donde se realizaran y recopilaran elementos tanto de cargo como de descargo que establecerán cual es el propósito criminal al exteriorizar conductas aparentemente punitivas.

En cuanto a la complejidad en materia procesal, el crimen Organizado esta se relaciona con las dificultades probatorias que entraña la persecución de los denominados delitos *no convencionales*, estos son *aquellos que generan un enorme daño social, concreto o potencial, para el desarrollo político, social y económico de la población en general, y en los que se afectan prioritariamente intereses colectivos y difusos.*

En sentido, la Ley Contra el Crimen Organizada no se refiere al concepto sustantivo de complejidad, ni al procesal; sino que se trata de una interpretación *sui generis* que fija la competencia acerca de hechos que no necesariamente revelan desde el inicio o dentro de su diligenciamiento, dificultad probatoria alguna

Desde esta perspectiva, cuando se ejecuta de manera planificada cualquiera de los delitos antes citados, mediante una organización de naturaleza permanente, con cierto nivel de jerarquización y en los que existe una disociación entre los que deciden y ejecutan, tal reparto de funciones, generará fuertes dificultades para las instancias públicas de persecución, requiriendo para ello –por ejemplo– el uso de los denominados métodos extraordinarios de investigación para su efectiva comprobación, los cuales deberá de utilizar la representación fiscal en el presente proceso, en consecuencia **Por las razones ut supra los hechos presentados son de competencia especializada, por lo cual se admite la misma.**

### **III.- HECHOS ATRIBUÍDOS**

#### **A).- Relación fáctica de los hechos objeto de imputación**

Se hace constar por parte del suscrito Juez, que la representación fiscal ha formulado un análisis detallado de los hechos que han sido objeto de la Solicitud de Imposición de Medidas, el cual se originaron debido a la denuncia interpuesta por la víctima, el diputado Erick Alfredo García Salguero, en fecha treinta y uno de julio de dos mil veintidós, en el cual se establece una serie de publicaciones realizadas por medio de la red social Twitter (ahora X), por parte del usuario @AMuyshondt, utilizando por Alejandro Muyshondt, en las cuales constan de diversas acusaciones relacionadas a hechos delictivos atribuidos a la referida víctima, los cuales constan en los folios 3 frente al folio 42 frente de la carpeta judicial, que, para los efectos de la presente resolución, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 334 numeral 2 del Código Procesal Penal, y evitar la transcripción de folios, únicamente se consignará la relación de los hechos objeto de esta resolución:

### **IV.- RELACIÓN DE LOS HECHOS.**

Según la solicitud planteada por el Ministerio Público Fiscal, el procesado Luis Alonso Portillo Turcios, es quien proporciono capturas de pantalla a la incoada Nidia Turcios, puesto que en el audio la diputada suplente, aseguró que quien le pasó las capturas de pantalla es Luis (refiriéndose al señor Portillo Turcios, quien es el asistente Jurídico de la víctima en la Asamblea Legislativa), mismo que al tener conocimiento de los hechos que se le estaban atribuyendo, interpuso aviso, por diferentes delitos, que en lo medular mencionó:

“Que el día veintisiete de julio del presente año, en redes sociales comenzaron a publicarse diversas imágenes atacando al diputado Erick García, quien actualmente es su jefe, esas publicaciones eran desde la cuenta del señor Alejandro Muyshondt, a quien el señor Luis Portillo, no conoce en persona, sin embargo, manifestó que conoció a la diputada Nidia Turcios, durante la época de universitarios y poseía el número de teléfono 7529-4509, aproximadamente en el año dos mil siete, manteniendo una relación únicamente de compañeros.

Pasados unos años, ya no tuvo comunicación con Nidia Turcios, hasta que se la encontró en un café, en donde intercambiaron números telefónicos y retomaron la relación de amistad; comentándole Nidia, que en esos momentos se encontraba viviendo con una hermana en una zona de la colona Escalón, ubicada en el municipio y departamento de San Salvador, siendo que Luis Portillo, le ofrece compartir vivienda, situación que se concretizó aproximadamente a finales del año dos mil veinte, por lo que dicha convivencia, fortaleció su trato, confianza y amistad.

A raíz de las iniciativas que tenía Nidia Turcios de participar en el ámbito político, Luis Portillo, se involucró junto a ella en las elecciones internas del Partido Político Nuevas Ideas, siendo que a finales del año dos mil diecinueve, conoció a la víctima Erik García. Resultando en esas elecciones internas Nidia Turcios como suplente del diputado Erik García.

Cuando Nidia Turcios fue electa (como suplente del diputado), su actitud cambió, llegando inclusive a tener discusiones sobre cuestiones monetarias con Erick García, situación que se hizo de conocimiento de los miembros del equipo de trabajo del diputado, ya que tenían un grupo de WhatsApp.

Aproximadamente en el mes de septiembre del año dos mil veintidós, la diputada suplente Nidia Turcios, mientras se encontraban en la casa de habitación de Luis Portillo, le preguntó cuánto ganaba, a lo que él, le contestó que mil quinientos dólares, por lo que ella le manifestó que si no quería ganar como dos mil dólares o incluso más, a lo que Luis Portillo le preguntó que a cambio de qué, respondiéndole ella **que lo único que tenía que hacer era ayudarlo a darle muerte política a Erick García, que lo pensara y que le diera una respuesta.**

La incoada Nidia Turcios, en el mes de octubre del año dos mil veintidós, le realizó por segunda ocasión a Luis Portillo, la pregunta y volvió a manifestar que “le darían baja política a Erick, que eran varias personas que estaban interesadas en que ya no participara en la contienda electoral.” En este segundo ofrecimiento que le realizó la diputada para desprestigiar al diputado Erick García, lo realizó cuando la hermana de Luis Portillo, de nombre Alba Maribel Portillo, se encontraba en la habitación.”

Para el caso en concreto el indiciado Luis Portillo ostenta la calidad de cómplice necesario de la señor Nidia Araceli Turcios Anaya, según la representación fiscal, ya que sin la información proporcionada por el indiciado ésta no habría proporcionado al señor Alejandro Muyschondt información de carácter personal que posteriormente se hizo pública todo con la finalidad de apartar de su cargo de diputado propietario a la víctima el señor Erick García, acciones que quitándolas de la realidad no hubieran concurrido las acciones delictivas antes mencionadas.

## **V. CALIFICACIÓN JURÍDICA**

En cuanto al delito atribuido al procesado vinculado a la presente causa penal, siendo este el de **Extorsión Agravada** se tiene que, al realizar un análisis doctrinal y jurisprudencial del mismo es posible determinar que:

La modalidad del delito de **Extorsión Agravada**, atribuido a los ciudadanos procesados se encuentra previsto y sancionado los Arts. 2 y 3 numerales 1, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, el cual literalmente establece:

**“Extorsión”**

*“Art. 2.- El que realizare acciones tendientes a obligar o inducir a otro, aun de forma implícita, a hacer, tolerar u omitir un acto o negocio de carácter patrimonial, profesional o económico, independientemente del monto, con el propósito de obtener provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero, será sancionado con prisión de diez a quince años”.*

En relación a ello, se encuentra también estipulado:

**“Extorsión Agravada”**

*Art. 3.- La pena establecida en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte del máximo establecido, si concurriere alguna de las circunstancias siguientes:  
(...)*

*1) Si el hecho fuere cometido por dos o más personas o miembro de una agrupación, asociación u organización ilícita a que se refiere el Art. 345 N° 1 del Código Penal; (1) (...)*

*6) Si el hecho se cometiere aprovechándose de la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes; (1)*

*(...)*

*7) Cuando el hecho lo cometiere funcionario, empleado público, municipal, autoridad o agente de autoridad, en ejercicio o no de sus funciones; (1)*

*(...)*

*9) Si el hecho se cometiere utilizando cualquier medio para el tráfico de telecomunicaciones;*

*10) Si el hecho se cometiere en perjuicio de funcionario, empleado público, municipal, autoridad pública o agente de autoridad, en ejercicio de sus funciones; y, (1)*

A respecto de lo anterior, la existencia del delito de Extorsión, en virtud de ser éste un ilícito de resultado económico o patrimonial, que se consuma desde el momento que el sujeto pasivo toma la decisión perjudicial de obtener un provecho y beneficio de tipo profesional.

En ese sentido, resulta necesario traer a colación el ánimo de beneficio profesional en la acción dolosa los sujetos activos, pasando por el ejercicio de amenaza o intimidación hacia la víctima; puesto que, la conducta adoptada de amenaza es grave, ya que configura el curso causal tendiente a la obtención de un beneficio personal, o el referido ánimo de obtener un provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí, utilizando para ello diversos métodos de intimidación como es el presente caso, que a través de una serie de publicaciones han ejercido violencia moral, que vuelvan razonablemente viable el obligar a otra persona a adoptar la expresada decisión perjudicial.

Por otro lado, el referente ilícito penal está bajo la categoría de los delitos de resultado por lo que su consumación no tiene dependencia si el acto o negocio se llevó a cabo; y responderán como coautores, tanto el que realice la amenaza o exigencia, bajo esa lógica, la hipótesis normativa planteada en la presente audiencia de imposición de medidas reúnen todos los elementos típicos

expresados en la descripción legal, de tal manera que el delito de perfecciona si han de transcurrir todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo correspondiente, partiendo siempre de su carácter pluriofensivo.

Los hechos arriba narrados, se constituyen en el delito de **Extorsión Agravada**, previsto y sancionado en los Arts. 2 y 3 numerales 1, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, el delito se ha establecido por haberse dado amenaza o intimidación hacia la víctima, provocada mediante la facilitación de capturas de pantalla, las cuales sirvieron para configurarse dicho delito.

La acción presuntamente realizada por el indiciado es típica por encontrarse esta conducta regulada y sancionada en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; por lo que, la Acción es contraria al Ordenamiento Jurídico Penal, que prohíbe ese tipo de conductas, pues el Derecho Penal tutela determinados presupuestos imprescindibles para una existencia común, siendo dichos presupuestos el Derecho a la Vida, a la Integridad Física y moral, a la Seguridad, al Patrimonio Privado, etc., Derechos inherentes a la persona humana por la condición misma con la que ha sido revistada; en el caso en concreto se configura la Culpabilidad, vista, desde el punto que el imputado pudo haber actuado de una manera diferente, pues presuntamente el Ministerio Público Fiscal manifiesta que este, al brindar información concretamente en capturas de pantallas, conllevaría a un acto, siendo este precisamente lo que predetermina el comportamiento de una persona.

Luego de analizar del porqué se ha calificado el hecho como **Extorsión Agravada**, respecto de las agravantes que se han considerado que existieron en la comisión de este ilícito, en ese sentido valorando las circunstancias del hecho, pueden incluirse la Agravante que se regula en el numeral 1, 6, 7, 9 y 10 de la referida ley y es decir que dicho acto fue *cometido por dos o más personas; en el cual se aprovecharon de la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes; el hecho delictivo fue cometido por empleado público, en ejercicio; el hecho se cometió utilizando capturas de pantalla, por medio de una red social para el tráfico de telecomunicaciones; y el hecho se cometió en perjuicio de funcionario en ejercicio de sus funciones.*

Asimismo, presuntamente se ha configurado la calidad de complicidad necesaria, la que se ve reflejada por la forma en que los hechos suceden, puesto que el **cómplice necesario** es aquel que contribuye o coadyuva a la consumación del delito aportado su esfuerzo, ya que sin él no llegaría a realizarse, es decir, aquella conducta decisiva por su eficacia, necesidad y trascendencia objetiva para el resultado final de la acción. Resulta evidente que la complicidad necesaria presenta notas de cualificada aportación y eficiente causalidad en la producción del resultado delictivo que le dotan de especial relevancia y trascendencia para la consecución del objetivo propuesto, hasta el punto de superar lo que sería una mera aportación circunstancial de fácil sustitución, propia de las colaboraciones contingentes y secundarias.

Respecto a ello, la Sala de lo Penal, en el proceso bajo Ref. C320-02, de las quince horas con treinta minutos del día veintitrés de febrero del año dos mil cuatro; manifiesta que la complicidad; *"...sus acciones contribuyen a la realización del delito por el autor, con la aclaración de que no son acciones típicas en sí mismas, sino que se montan sobre la tipicidad del autor. De suerte que para*

efectos de esta sentencia, el motivo de impugnación ha sido sobre la interpretación de la complicidad, de la cual se dice en sentido amplio, que es quien coopera dolosamente en la realización de un hecho doloso cometido por doloso"; .... "cómo lo sostiene *Jescheck*, citado por el ilustre penalista relacionado en esta sentencia "...complicidad es el auxilio doloso a otro en su hecho antijurídico y dolosamente realizado[...]""[...] De lo anterior se advierte que el parámetro de cuándo será necesaria o no necesaria la complicidad dependerá de si esa ayuda ha sido esencial y útil para la comisión del delito, sin entrar a analizar tantas teorías que discuten ampliamente este punto como lo es la teoría de los bienes escasos o la teoría de la equivalencia de las condiciones, debiendo en palabras sencillas decir que la complicidad necesaria como su palabra lo sugiere es vital para que los autores logren su propósito, en cambio la no necesaria va abarcada por aquella persona que aun cuando no hubiera hecho lo que hizo, de todas formas el delito siempre se hubiese cometido, entonces su contribución no es vital y simplemente ha ayudado de cualquier forma, que puede ser hasta con simples consejos, sin embargo se debe aclarar que esa ayuda que da es dolosa y el legislador lo que sanciona es que sabiendo desde antemano que se cometería un delito, como puede ser quitar la vida a otro ser humano, aún ayuda y si bien es cierto puede no ser significativa esa ayuda, para el legislador es penalmente relevante que lo haya hecho y por eso también le suma una penalidad bastante alta, según el delito correspondiente [...]".<sup>1</sup>

Visto el análisis jurisprudencial anterior, para este caso en concreto el indiciado Luis Portillo presuntamente posee la calidad de cómplice necesario de la señora Nidia Araceli Turcios Anaya, ya que sin la información proporcionada por el referido incoado, ésta no la habría proporcionado al señor Alejandro Muyschondt, información de carácter personal que posteriormente se hizo pública todo con la finalidad de apartar de su cargo de diputado propietario a la víctima el señor Erick García.

Tal como se establece en el audio la diputada suplente Nidia Turcios, aseguró que quien le pasó las capturas de pantalla es Luis, refiriéndose al señor Luis Alonso Portillo Turcios; así como el documento privado de mutuo en donde él era uno de los comparecientes, y que tenía en resguardo dentro de su casa de habitación siendo este el único que tenía acceso a dicha información, valiéndose de la relación laboral con la víctima y el acceso a información privilegiada en razón de su función de asesor jurídico de este, aprovechándose de igual forma de la relación de convivencia y amistad con la diputada suplente Nidia Turcios.

En cuanto al crimen organizado, se ha agregado dimensiones objetivas y subjetivas de las siguientes características: (a) se constituye en un grupo; (b) existe una vinculación y pertenencia de los integrantes como miembros de la organización; (c) existe una permanencia en el tiempo de la organización; y (d) cuenta con una estructura interna que puede ser, entre otros, de carácter jerárquico-vertical y aún de carácter celular.

Entonces, al analizar los elementos del tipo para considerar conformadas estas grupos, debemos partir del hecho que la conformación, se fundamenta sobre la base de algunos aspectos

<sup>1</sup> <https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=1&data=DocumentosBoveda%2FD%2F1%2F2020-2029%2F2023%2F02%2FF8AF0.PDF&number=1018608&fecha=06/02/2023&numero=260C2021&cesta=0&singlePage=false%27>

importantes: como primer aspecto podemos mencionar la temporalidad de la agrupación, asociación u organización, esta debe ser permanente (sin tiempo de existencia estipulado, ya que subsiste con el paso del mismo); como segundo aspecto, se cuenta con el número de sus miembros y organización y es que la ley exige como mínimo tres personas para conformar la agrupación, situación que parece lógica al afirmar que no puede existir agrupación, asociación u organización unimembre, es decir que se componga por un solo integrante y en relación con el máximo de sus integrantes, la ley deja abierta la posibilidad que pueda ser conformada con cualquier número de miembros lo cual guarda íntima relación con la organización que debe existir dentro de ese grupo, es decir, no solo son tres o más personas que se han agrupado, asociado u organizado de forma temporal o permanente, sino que tienen ciertas líneas jerárquicas, planes de acción, finalidades y demás; es decir, existen dentro de esta organización criminal; en donde cuya decisión sea por si u otras personas que también pertenecen a esta; siendo eficiente tal forma de organización para el grupo, por cuanto hay distribución de roles y desempeño de estos dentro de la misma; solo así puede considerarse a un grupo estructurado; como tercer aspecto, se resalta como elemento trascendental, la finalidad de esa organización criminal, ya que, con las características que hasta ahora se han apuntado no existe una violentación directa de la ley puesto que lo que vuelve relevante penalmente esta conducta, es la finalidad de organización, ya que esta se conforma con el único objetivo de cometer delitos, por tanto no puede ser una agrupación, asociación u organización que tenga el consentimiento de la ley, sino más bien actuar en total contraposición al ordenamiento jurídico.

Finalmente, resulta necesario determinar que, la conducta a sancionar en cuanto al tipo penal objeto de análisis es el permanecer, dirigir o impulsar uniones de personas organizadas con duración temporal o permanente y con la finalidad genérica de delinquir, bastando para su configuración comprobar la permanencia a la organización.

## **VI.- PROBABILIDAD INDICIARIA DE PARTICIPACIÓN Y ELEMENTOS INDICIARIOS.**

En el presente caso, la Representación Fiscal le atribuye al procesado: **Luis Alonso Portillo Turcios**, el delito de **Extorsión Agravada**, regulada en los Arts. 2 y 3 numerales 1, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, en perjuicio de la víctima **Erick Alfredo García Salguero**.

Habiéndose agregado diligencias y elementos indiciarios obtenidos y presentados por el mismo Ministerio Público Fiscal, los cuales han de ser analizados y esbozados respondiendo a la etapa procesal embrionaria en la que se encuentra el presente proceso penal, contándose para el caso del encausado ya relacionados con los elementos que a continuación se detallan:

### **1. LUIS ALONSO PORTILLO TURCIOS**

**A.-** Acta de incautación de teléfono celular, de las dieciséis horas con treinta minutos del día siete de agosto del presente año. **(Folio 49 Pieza 1)**

**B.-** Esquela de notificación emitida por el Juzgado de Paz de San Salvador. **(Folio 50 Pieza 1)**

C.- Auto de las ocho horas con cincuenta minutos del día once de agosto del presente año, por medio del cual ordenan autorizar el secuestro del teléfono celular, y la práctica de acto urgente de comprobación consistente en la obtención, resguardo y análisis de información electrónica de dicho aparato. **(Folio 51-53 Pieza 1).**

D.- Fotocopia de Certificación del Documento Único de Identidad del incoado. **(Folio 54 Pieza 1).**

E.- Fotocopia certificada de la Certificación del Documento Único de Identidad del incoado. **(Folio 285 Pieza 2).**

F.- Fotocopias certificadas de movimientos migratorios de los incoados. **(Folios 288-296 Pieza 2).**

G.- Fotocopia simple del documento privado autenticado de contrato de mutuo simple, otorgado por Luis Alonso Portillo Turcios a favor de Erick Alfredo García Salguero. **(Folios 313-316 Pieza 2).**

## **VII. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN COMUNES PARA TODOS LOS CASOS**

A.- Denuncia de la víctima, interpuesta en sede fiscal, **(Folios 31-37 Pieza 1).**

B.- Cinco fotocopias de capturas de pantalla. **(Folio 38-42 Pieza 1).**

C.- Acta de entrevista de la víctima, de las dieciséis horas del día uno de agosto del presente año. **(Folio 43-45 Pieza 1).**

D.- Acta de ampliación de entrevista de la víctima, de las ocho horas del día siete de agosto del presente año. **(Folio 46-48 Pieza 1).**

E.- Acta de entrevista de las ocho horas con cuarenta y cinco del nueve de agosto del presente año, de la señora Leticia Cristabel Erazo Melgar, quien refiere tener una relación de noviazgo convivientes. (Agrega fotocopia de Documento Único de Identidad) **(Folio 58-59 Pieza 1).**

F.- Acta de entrevista, de las catorce horas con cuarenta minutos del día once de agosto del presente año, por medio del cual la señora Rebeca Aracely Santos de González. **(Folio 60-64 Pieza 1).**

G.- Acta de entrevista, de las dieciséis horas con cincuenta minutos del once de agosto del presente año, por medio del cual la señora Rebeca Aracely Santos de González está de acuerdo con colaborar por la Fiscalía en la presente investigación y para ello proporciona voluntariamente su aparato telefónico para la extracción de la información digital. **(Folio 65-66 Pieza 1).**

H.- **Informe relacional de información de fuentes abiertas**, de fecha 8 de agosto del año dos mil veintitrés, suscrito por Jorge Alberto Majano Portillo, Analista de la Unidad de Análisis de la Intervención, Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República, en el cual se detalla de forma cronológica todas las publicaciones efectuadas de la cuenta de Alejandro Muyschondt, @AMuyschondt, que contenían videos, fotografías o documentos, vinculados a hechos delictivos cometidos por el Diputado Erick Alfredo García Salguero; publicaciones de la cuenta de Erick García Salguero @ErickGarcia\_NI, que contengan videos,

fotografías o documentos, vinculados a posibles hechos delictivos cometidos por Alejandro Muyschondt y fijación o transcripción de videos, encontrados en las mismas redes sociales y otras, en los que consten insumos para acreditar la comisión de algún hecho delictivo. (Folios 297-312 Pieza 2).

I.- Fotocopias a color de capturas de pantalla. (Folios 317-320 Pieza 2).

### **VIII. VALORACION DE LOS ELEMENTOS INDICIARIOS**

Se deja constancia que la presente resolución se emite bajo los siguientes rubros de razonamientos, debiendo abarcarse dos presupuestos o requisitos esenciales que en este caso son: i) la *“probabilidad positiva de la existencia de los hechos atribuidos”* y ii) *“la participación delictiva de los acusados”*, para después hacer el examen de la medida cautelar, respecto a lo que es *“la apariencia de buen derecho”*, y *“el peligro razonado de fuga”*, que es el objeto de la presente audiencia de imposición de medidas.

En el proceso penal salvadoreño, toda persona goza de la presunción de inocencia, que solo puede ser quebrantada o vencida en juicio, debiendo tratarse en todo el proceso como sujetos y no como objeto procesal.

El objeto o discusión procesal, deberá tener la condición o virtualidad de que, a este nivel de examen del expediente, ya sea probabilidad, duda o certeza, la prueba o elementos recolectados sirvan para generar convicción suficiente; en caso de duda, favorable al imputado, en caso de probabilidad o certeza de la existencia del hecho y participación del mismo.

En tal sentido, los indicios o prueba de orden directo deberán ser legales, útiles y pertinentes, para formar esa convicción. A nivel de audiencia de imposición de medidas, no se exige la certeza para acreditar los hechos, sino exige un mínimo de actividad indiciaria, pero que tenga la misma calidad de ser legal, útil y pertinente, para demostrar la probable existencia del hecho atribuido y participación del imputado.

Como se mencionó al inicio por su carácter embrionario del proceso, en esta etapa de valoración no es necesario alcanzar el grado de certeza, por lo que se vuelve necesario recurrir a lo que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de Casación 139-CAS-2015, define como mínima actividad indiciaria y establece lo siguiente:

*“El indicio es un hecho que se prueba, asimismo, o que se encuentra probado y que permite por datos sensibles de la experiencia o de la ciencia, obtener el conocimiento de otro hecho que puede ser cierto o probable”*<sup>2</sup>. La cita es del autor **Washington Ábalos, en su obra Derecho Procesal Penal, tomo dos, Buenos Aires Argentina, Editorial Cuyo, página quinientos cuarenta**, sigue la Sala en su discurso estableciendo lo siguiente: *“la prueba indiciaria es valorable dentro de un proceso penal, pues no siempre puede recabarse una evidencia directa respecto del hecho*

---

<sup>2</sup> Washington Ábalos, Derecho Procesal Penal, tomo dos, Buenos Aires Argentina, Editorial Cuyo, página 540

*investigado y por ello al ser estimados los indicios se harán con respecto a los hechos y la sana crítica, tal como lo ordena el artículo ciento sesenta y dos del Código Procesal Penal, es decir considerando las máximas de la experiencia y el sentido común, al analizar en conjunto todos los elementos probatorios que rodearon el hecho teniendo eficacia demostrativa la prueba referencial cuando se valora de manera conjunta con otros medios de prueba o al menos con otros indicios que complementan la virtualidad probatoria de aquella testifical dándole así la fuerza evidenciable que por sí sola no tendría; asimismo la existencia de prueba de esta naturaleza se ve justificada por el principio de libertad probatoria”.*

En tal sentido, se hace un breve examen depurativo de los elementos de convicción que la agencia fiscal incorpora en la carpeta judicial, y solicitud de imposición de medida cautelar; es decir, este Juzgador tomará en cuenta lo que orienta la línea jurisprudencial sobre el concepto de indicios, y lo que la línea de Hábeas Corpus 130-2015, nos determina para considerar que son actos urgentes de comprobación y los actos puros de investigación, y sentadas las bases en que la línea en que se generará el discurso de la decisión, iniciamos con el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 2 y 3 numerales 1, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, asimismo la representación fiscal, se ha decantado por el Art. 1 Inc. 2 de la Ley Contra EL Crimen Organizado.

En relación a lo anterior, se cita la inconstitucionalidad 22-A-2006 y la improcedencia 244-2015, emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el que establecen un marco diferenciador sobre lo que debe entenderse como competencia y crimen organizado, así como establece los parámetros con los que operan dentro de un territorio determinado, siendo la definición la siguiente:

El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, por auto de las ocho horas con veinte minutos del día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, declinó la competencia, expresando entre sus fundamentos lo siguiente: “...(...) Ciertamente es de mencionar que la competencia especializada se da no sólo por tratarse de una pluralidad de sujetos, sino por encontrarnos en presencia de una estructura criminal, según lo define la Ley Contra el Crimen Organizado (...) Es decir que se está ante un grupo de personas que se unieron concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos y que dicho grupo de personas ha existido durante cierto tiempo...”.

Conforme a lo antes expresado, el referido Tribunal ha determinado los requisitos que establece la suscita ley, ya que, para el caso en concreto, el origen de todo según los relatos de la representación fiscal mediante la audiencia de imposición de medidas, se originaron en el año dos mil veintidós, pero su efectividad se vino a ver el día veintisiete de julio de dos mil veintitrés y desde ahí se vinieron suscitando hasta llegar al día seis de agosto de dos mil veintitrés, donde dicho sujeto fue complice necesario para llevar a cabo el ilícito penal.

El tema en desarrollo, es entrar a examinar si se logra establecer el elemento objetivo común para todos los imputados, haciendo el recorrido y examen de las diligencias iniciales de investigación, estas tienen características que ya ha señalado en alguna medida la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la casación 368-2017, respecto a las condiciones de validez de la prueba indiciaria, dicho Tribunal casacional ha establecido lo siguiente: “(.) de probanza dificultosa por

*inexistencia de prueba o por no ser convincente mediante la prueba de otro u otros hechos conectados lógicamente con aquel, según criterios de experiencia y no contradictorios por otras pruebas, de manera que la prueba de este u otros hechos implique la prueba de aquel otro hecho, por lo que se requiere pluralidad de indicios, indicios que estén probados, que sean periféricos al dato factico a probar, su interrelación y racionalidad de inferencia, que es lo que se conoce en doctrina como prueba indirecta o indiciario(.)”<sup>3</sup>, esa construcción nace del hecho factico acreditado, por el delito de extorsión agravada.*

La regla que se sigue, es que exista una mínima actividad indiciaria, la Sala de lo Penal mediante la casación 448-2016 del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, establece: *“la fuente directa es aquella que se dirige a mostrar certeza de unos hechos que no son constitutivos de delito, pero que la existencia de estos y la participación del imputado pueden llegar a ser inferidos por los mismos, por medio de un razonamiento basado en el nexo causal lógico existente entre los hechos acreditados y los que se trata de probar, el juzgador puede fundarse en elementos de convicción directos como son los indicios con la condición de que estos deben ser unívocos singular potencia significativa concomitante al hecho que se trate probar”*.

La representación del Ministerio Público Fiscal exige que, actas de entrevistas, la denuncia de la víctima, actas de registro con prevención de allanamiento, informe de inspección del lugar de los hechos, actas de incautación, -entre otros-, se acredite el dato no conocido, que es la existencia del hecho delictivo y la participación del incoado **Luis Alonso Portillo Turcios.**

Aunado a ello, los imputados cuentan con los actas de incautación, actas registro con prevención de allanamiento y actas de objetos incautados, que vinculan la pertenencia y existencia a dicho grupo; si bien es cierto los incoados en este momento goza de presunción de veracidad, el cual deberá ser soportado con otro tipo de información que indique los planes en qué han participado estas personas, pero sí por otro elemento de prueba independiente distinto como poder hacer una testifical o algún registro de inteligencia policial e incluso de la extracción de informan de todos los objetos que han sido incautados como posible vinculación, que oriente efectivamente que existe el delito de Extorsión Agravada.

Sobre la existencia del delito y la participación indiciaria en grado de complice necesario del inculpado hasta este momento procesal la evidencia mínima de carácter indiciaria orienta la existencia de la unión organizada. Por tanto, se ha establecido de manera indiciaria la existencia del delito de **Extorsión Agravada**, previsto y sancionado en el artículo trescientos cuarenta y cinco, inciso primero numeral dos del Código Penal, atribuido a los imputados ya indicados.

---

<sup>3</sup> Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, casación 368-2017

### **IX. MEDIDA CAUTELAR**

En virtud de lo anterior, el suscrito aclara que, de conformidad con el Art.297 numeral 2 del Código Procesal Penal, en el cual establece que; *“la audiencia se llevara a cabo dentro de los plazos siguientes...2) Si no se ha ordenado la detencion del imputado o el fiscal no solicita la continuacion de la detencion o aun ni ha podido ser capturado, dentro de los cinco dias habiles siguientes”*. En ese sentido, en el presente caso penal mediante el auto de recibido, de las diecinueve horas con cincuenta minutos del día veintitres de agosto del presente año, este Juzgado giro la orden de citar y notificar al referido incoado, por medio de las siguientes direcciones: **1. Colonia San José, calle San José F-2, casa diez, Santa Tecla, departamento de La Libertad**; **2. Residencial El Paraíso, Boulevard Sur, casa dos Q, Santa Tecla, departamento de La Libertad**, a fin que compareciera a este Tribunal, para ser informado del procedimiento iniciado en su contra y asimismo, manifestara si nombraria defensor particular o se le nombrará uno de oficio y por consiguiente hacerles saber los Derechos y Garantías que le confiere la ley en los Artículo 12 de la Constitución de la República, 82 del Código Procesal Penal, así como los Artículos 14.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para los efectos correspondientes de conformidad a lo establecido en los Artículos 11, 12 y 15 de la Constitución de la República, Artículos 10, 87 numeral 1, 98 y 165 del Código Procesal Penal.

Como resultado de dicha diligencia, fue imposible ubicar a dicho imputado quien no ha comparecido a la Audiencia de Imposicion de Medidas Cautelares y por quien se libraron las respectivas citas de conformidad al Art.165 del Código Procesal Penal, a las dos direcciones proporcionadas por el Ministerio Público Fiscal donde este reside supuestamente, por lo que es necesario recordar que hasta el momento en apariencia el imputado ausente, ya que ignora que está siendo procesado en este juzgado, y no se puede valorar la aplicación de medida alguna, bajo estos supuestos debemos acogernos a la jurisprudencia emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de Habeas Corpus clasificado con la referencia 330-2011, la sentencia de las once horas con cincuenta y un minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil trece, se dijo:

*“... “A partir de ello, esta sala determinará si la imposición de la medida cautelar de detención provisional adoptada con base en ese fundamento (necesidad de asegurar la comparecencia del procesado en el juicio) cumple con el estándar constitucional dispuesto para legitimar este tipo de restricción al derecho de libertad de una persona... .., ya se ha mencionado que los actos de comunicación son el vehículo procesal de necesaria existencia para el ejercicio del derecho de defensa dentro de un proceso. Entonces, solo a través de la comunicación efectiva de las decisiones judiciales se habilitará a la persona que figure como imputado, el despliegue de todas las herramientas que garanticen el efectivo ejercicio de su defensa. Ahora bien, lo mismo se puede señalar respecto a la imposición de una restricción al derecho de libertad, ya que antes de su adopción es necesario que la persona –contra quien se dirija la orden de este tipo, haya tenido conocimiento de su obligación de concurrir a las diligencias del proceso penal instruido en su contra*

*y sea su negativa, a concurrir al llamado judicial, lo que lleve a la conclusión de que la única manera de vincularlo es a través de la medida cautelar de detención provisional.*

*Lo dicho se encuentra dispuesto en el art. 330 numero 1 Procesal Penal, al prescribir como causal para la imposición de aquella “cuando el imputado no comparezca sin motivo legítimo a la primera citación o cada vez que el tribunal lo estime necesario”; Es decir la negativa del imputado a comparecer a sede judicial es el elemento relevante para sostener la procedencia de dicha medida cautelar. No es pues la supuesta citación efectuada a los encartados, a partir de que fue requerida por auxilio, sin tener certeza de que ésta haya sido efectuada, lo que autoriza su imposición. Merece atención lo expuesto por la autoridad demandada en la resolución mediante la cual se ordenó la aludida medida, en cuanto a la necesidad de la misma, ya que determino que la eficacia del proceso se veía amenazada por la existencia de datos objetivos que permitían inferir la imposibilidad de comparecencia de los imputados; sin embargo, en el caso de los favorecidos no consta que haya sido legalmente citados, y no menciona en su resolución cuales eran esos datos objetivos respecto de estos. A partir de ello, tal afirmación no puede validar la detención provisional impuesta dado que esta únicamente puede surgir del cumplimiento de los presupuestos procesales o de la omisión comprobada del imputado de atender el llamado judicial que se le efectúe, siendo este último caso el que se ha determinado en este proceso constitucional que la autoridad no comprobó, y no obstante ello, decretó la medida restrictiva.*

*En definitiva, la orden de detención provisional impuesta en contra de los beneficiados no cumple con el parámetro constitucional que habilita la restricción al derecho de libertad personal, al no concurrir los presupuestos legales que la legitiman, con lo cual deberá dejarse sin efecto la orden de captura derivada de dicha actuación Inconstitucional resolución HC 492-11 de fecha 7 de diciembre del 2012,” (sic).... Por tanto este Tribunal, al constatar que esta persona no ha sido legalmente citada, a efecto de comparecer a la audiencia de imposición de medida cautelar por imputado con calidad de ausente, **se va a abstener de aplicar la medida más gravosa de la detención provisional, así como tampoco de aplicar medidas sustitutas a la detención provisional**, pero sí, por constar con elementos de la posible existencia del tipo penal acusado y la presunta participación del procesado, es procedente, por cuanto la no aplicación de cualquier medida que vulneraría la jurisprudencia antes relacionada; dejándole la posibilidad a la representación fiscal haga uso de los medios de impugnación que la ley le franquea, para revertir esta decisión, por lo anterior y con el objeto de no vulnerar ningún derecho y garantía a favor del imputado ausente.*

#### **X. PLAZO DE INVESTIGACIÓN**

El Ministerio Público Fiscal ha solicitado un plazo de instrucción de **seis meses**, y en vista de los imputados a ser investigados y la cantidad de diligencias que son necesarias realizar a efecto que se realice una pronta y cumplida justicia, el suscrito Juez autoriza **SEIS MESES**, contados a partir del día de celebración de audiencia; es decir, que el mismo concluye el día **VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, de conformidad al Art. 17 Inc. 2 de la Ley Contra el Crimen Organizado, y Arts. 309, 355 y 356 del Código Procesal Penal; tiempo durante el cual el Ministerio Público, deberá de realizar las diligencias útiles que considere oportunas para poder sustentar en adelante cualquier petición con las formalidades contenidas en los Arts. 355 y 356 del

Código Procesal Penal y una vez vencido el mismo tendrá el Ministerio Público Fiscal el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, para presentar cualesquiera de los dictámenes regulados en el Art. 355 del Código Procesal Penal.

#### **XI.- RESERVA TOTAL DEL PROCESO**

Este Juzgador considera que, de conformidad con el Art. 307 del Código Procesal Penal, en donde se establece que, " *...los actos procesales deben de ser público; sin embargo, se puede ordenar la reserva total o parcial, en resolución fundada, por diferentes motivos, los cuales se detallan: la moral pública, la intimidad, la seguridad nacional o el orden público lo exijan; o esté previsto en una norma específica*", en virtud de ello, tenemos que en el presente proceso puede advertirse un posible riesgo para la vida de las personas naturales que figuran en el mismo, ya que los investigados podrían ubicar, intimidar o amenazar a los agentes policiales así como a los funcionarios o empleados que participan en su curso; la reserva total en este caso, resulta necesaria con la finalidad de proteger la conservación de los Derechos Constitucionales (Derecho a la vida, integridad física y seguridad artículo 2 de la Constitución de La República), puesto que sus datos identificativos ya constan en el archivo judicial, incluyendo los datos tanto de ciudadanos civiles y de agentes de autoridad pública; tomando además en cuenta los siguientes criterios configurados en este caso: a). *Gravedad del hecho que se conoce*, b). *Relevancia del testimonio de los agentes captores y policiales para la acreditación del hecho investigado en su momento procesal oportuno*, y c). *Existencia y nivel de riesgo*.

Es decir que, se pretende salvaguardar la vida e integridad de las personas naturales que han participado en las diligencias de investigación, así como de los funcionarios; y también se pretende asegurar el debido curso del proceso previendo que la divulgación de la información que ya consta agregada o que se ha de agregar a futuro pueda entorpecer el curso de la investigación y del proceso mismo, en ese sentido, el Suscrito Juez considera procedente decretar la **RESERVA TOTAL** del proceso de conformidad con el Art. 307 y 369 del Código Procesal Penal.

**POR LO TANTO**, con base a las razones ya expuestas anteriormente, artículos precitados en esta resolución, y Artículos: 1, 2, 11, 12 y 15 de la Constitución de la República; artículo 2 y 3 numerales 1, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión; Artículos: Artículos: 1, 2, 4, 6, 7, 49, 54, 57, 143, 144, 177, 309, 328, 329, 330 numeral 3, y 331 Inciso 2º, 332 todos del Código Procesal Penal, Artículos 1, Inc. 2 de la Ley Contra el Crimen Organizado, **SE RESUELVE:**

**A).- ORDÉNASE LA INSTRUCCIÓN FORMAL SIN LA APLICACIÓN DE NINGUNA MEDIDA CAUTELAR**, para el imputado ausente: **Luis Alonso Portillo Turcios**, quien es de treinta y un años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, soltero, del domicilio de Santa Tecla, residente en: colonia San José, calle San José F-2, casa diez, Santa Tecla, departamento de La Libertad y de Residencial El Paraíso, Boulevard Sur, casa dos Q, Santa Tecla, departamento de La Libertad, originario de San Miguel, departamento de San Miguel,, hijo de Alba Lilian Turcios de Portillo y Luis Alonso Portillo Ramos, quien se identifica con documento único de identidad número cero cuatro seis cinco nueve cero seis cero - tres, nació el día treinta de julio del año mil novecientos noventa y dos; a quien se le atribuye la comisión del delito de **Extorsión Agravada**, regulada en los

Arts. 2 y 3 numerales 1, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, en perjuicio de la víctima **Erick Alfredo García Salguero**, en relación con el Art. 1 Inc. 2°, y 4 de la Ley Contra el Crimen Organizado.

**B).- AUTORIZÉSE UN PLAZO DE INSTRUCCIÓN DE SEIS MESES**, de conformidad al Art. 17 inciso 2 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Art. 309 del Código Procesal Penal, tiempo durante el cual la representación fiscal, deberá de realizar las diligencias útiles que considere oportunas para poder sustentar más adelante cualquier petición con las formalidades de los Arts. 355 y 356 del Código Procesal Penal; dicho plazo considerado vencido finaliza el día **VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (25-02-2024)**, teniendo el Ministerio Público Fiscal el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, para presentar cualesquiera de los dictámenes regulados en el artículo 355 del Código Procesal Penal.

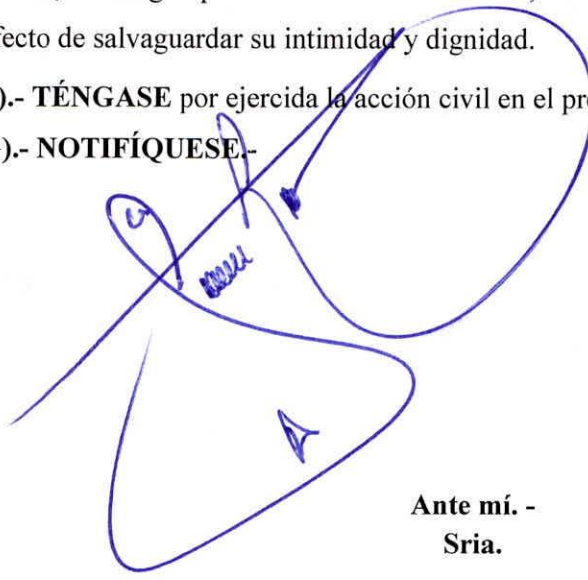
**C).- PARA CUMPLIR** con los fines generales de la Instrucción **SE ENCOMIENDA** a la Representación Fiscal realice las diligencias útiles que menciona en su solicitud fiscal y que no requieren de autorización judicial las que servirán para encontrar la verdad real del presente caso.

**D).- SE LE PREVIENE a la representación fiscal** de este caso penal, para que en el **PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES** evacúe lo siguiente: **REALICE GESTIONES DE INFORMES Y PETICIONES** dirigidas a las diferentes Instituciones Públicas que puedan dar indicios de ubicación del paradero del encartado ausente en este proceso, tales como: **A)** Alcaldías Municipales, **B)** Departamento De Migración y Extranjería, **C)** Centro Nacional De Registro De Personas Naturales, **D)** Registro De La Propiedad De Bienes y Raíces, **E)** Instituto De Seguro Social **F)** Super Intendencia del Sistema Financiero, y cualquier otra institución, para que puedan brindar información de utilidad para el paradero del justiciable ausente: **Luis Alonso Portillo Turcios**.

**E).- DECRETESÉ LA RESERVA TOTAL DEL PROCESO**, de conformidad al Art. 307 del Código Procesal Penal, con relación con el Art. 369 del mismo cuerpo normativo, esta Sede Judicial considera, que el Art. 6 de la Constitución de La República; es procedente decretar dicha reserva total, por lo cual, no estará permitido al público y prensa en general tener acceso al contenido del expediente, ni indagar quiénes son los involucrados, mucho menos a saber aspectos personales de estos, a efecto de salvaguardar su intimidad y dignidad.

**F).- TÉNGASE** por ejercida la acción civil en el presente proceso.

**G).- NOTIFÍQUESE.-**



Ante mí. -  
Sria.